

RECHAZAN DECLARACIONES EN APOYO A SÚMATE

Para el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, las recientes declaraciones de Human Rights Watch y el Departamento de Estado en favor de Súmate son "un nuevo error de estas organizaciones al involucrarse en la política de otros países".

Rangel aseguró que se trata de una decisión judicial y que el Gobierno Nacional nada tiene que ver con la sentencia emitida contra cuatro directivos de la asociación civil Súmate. Estas declaraciones las ofreció en el acto de celebración del XX aniversario de los oficiales integrantes de la promoción de la Aviación Militar Stte. (p) Gabriel Acosta Gil, realizado en el museo aeronáutico de Maracay.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, calificó como una "intromisión descarada" y "abusiva" las opiniones emitidas este viernes por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la organización pro derechos humanos Human Rights Watch en relación con la decisión del Tribunal 41 de Control, de enjuiciar a cuatro directivos de Súmate por conspirar.

"Los pueblos del mundo no andan juzgando los actos judiciales de ningún Gobierno extranjero. En Venezuela no es costumbre estar juzgando los actos judiciales que se producen en Colombia, Argentina y Estados Unidos. Eso, yo creo, es una característica de los imperios", afirmó el defensor del Pueblo.

El viernes el vocero del Departamento de Estado, Tom Casey, dijo que "las acciones judiciales que están siendo tomadas, desde nuestro punto de vista, simplemente son parte de una campaña del Gobierno venezolano para intimidar a los miembros de la sociedad civil y evitar que ejerzan sus derechos".

En similares términos se pronunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Vivanco aseveró que "procesar a la gente por traición cuando se involucran en legítimas actividades electorales es totalmente absurdo"._JFA

El Nacional

Lunes 11 de Julio de 2005

A/2

Política

Fiscal rechazó injerencia estadounidense en juicio a Súmate

El fiscal general, Isaías Rodríguez, cuestionó al Departamento de Estado norteamericano y la Human Rights Watch por su intromisión en la decisión de los tribunales de enjuiciar, en libertad, a directivos de Súmate por supuesta conspiración a la patria al recibir financiamiento extranjero.

“Es una grave injerencia en la política interna de Venezuela, en el ámbito internacional, pero más grave aún en las atribuciones judiciales (...) Quienes mantienen el discurso de la división de los poderes públicos deberían tener mucho más cuidado cuando emiten declaraciones relativas a esta función de control judicial del Estado, pues ésta descansa y está sustentada en

entrevistas, experticias y actos de investigación que los declarantes desconocen y, a pesar de ello, los califican irresponsablemente”.

En un comunicado, Rodríguez exhortó a quienes se erigen como defensores de los derechos humanos en el ámbito mundial y se apresuran a opinar sobre este tema a que vuelvan su mirada hacia la reciente decisión de los tribunales estadounidenses de condenar a cuatro meses de prisión a la periodista de The New York Time Judith Miller, por el hecho de resguardar su fuente de información, un derecho adquirido por los trabajadores de la prensa, que es reconocido internacionalmente:

“¿Dónde está Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el Departamento de Estado, Reporteros Sin Fronteras, incluso?

¿Dónde están las condenas a este hecho que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información?”.

“El Ministerio Público venezolano —aseguró— ha respetado cabalmente este derecho de los periodistas venezolanos. La declaración de Vivanco y Human Rights Watch sobre Súmate no sólo luce desproporcionada, sino que, además, la franca coincidencia con la Casa Blanca revela que esa pseudo organización defensora de los derechos humanos no tiene ningún tipo de independencia ni autonomía para discernir asuntos de esta naturaleza con criterio propio y, por el contrario, se muestra cínicamente con carácter oficial como otra oficina más del Departamento de Estado”.

Presume que Human Rights Watch y Vivanco defienden los intereses del Departamento de Estado porque, en sus informes, no atacan las violaciones en que incurre en Estados Unidos, en las que el gobierno de George W. Bush es tildado como el mayor enemigo de los derechos humanos. “Fue sancionado, el 3 de mayo de 2001, por 28 países que lo excluyeron de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas”. Y para avalar su crítica, citó una encuesta de Times. En la edición europea, la revista colocó a Estados Unidos en 2003 como el país que representa el mayor peligro para la paz mundial.

84% de un total de 318 mil votos emitidos lo consideró así, le siguió Irak con 8%: “A pesar de ello Vivanco, quien pareciera ser un injerto de vivo con banco, se desvive por señalar sólo aquellos países que Bush considera enemigos”.

A su juicio, Vivanco trabaja con la Casa Blanca para salvar la responsabilidad de la interferencia del Estado norteamericano —a través de donaciones y contribuciones— en organizaciones venezolanas con propósitos políticos bien definidos antes y después de los sucesos de abril de 2002.

“Vivanco no parece un director de una organización defensora de los derechos humanos sino más bien de ‘derechas humanas”, expresó